



Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA (REPARTO)
E.S.D.

DEMANDANTE: **MARTHA CECILIA TORO OTALVARO**

DEMANDADO. **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**

LILIANA ANDREA VELASQUEZ, abogada en ejercicio, identificada con la C.C. No. 29.742.824, con T.P. No. 244.138 del C.S. de la J.; actuando como apoderada de la Sra. **MARTHA CECILIA TORO OTALVARO**, mayor de edad, identificada como aparece C.C. No. **31.197.276**, mediante el presente escrito, interpongo demanda por el medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho contra la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, pretendiendo se *nuliten* actos administrativos que le niegan a la demandante la reparación individual por vía administrativa, por el homicidio de su compañero padre de sus hijos, el señor **ARGEMIRO SAENZ ALZATE**, acaecido el día 25 de Febrero de 2009, en el Municipio de Restrepo Valle del Cauca, mediante el Acto Administrativo contenido en la **Resolución No.2013 -10579 del 05 de Diciembre de 2012**, decisión confirmada mediante la **Resolución No. 2295 del 23 de Febrero de 2015**, proferida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el **acto ficto o presunto surgido al no resolverse el recurso de apelación** concedido en la Resolución que resolvió el recurso de reposición confirmado la negativa; lo pedido es la revocatoria de los referidos actos administrativos, reconociéndole la reparación administrativa contemplada en la Ley de Víctimas.

Solicitud que fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Mediante la Resolución No. 2013 – 10579 del 05 de Diciembre de 2013, la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL**, negó la inclusión del Homicidio de mi compañero **ARGEMIRO SAENZ ALZATE**, como víctima de la violencia, en hechos acaecidos 25 de Febrero de 2009.
2. La entidad mediante la **Resolución No. 2295 del 23 de Febrero de 2015**, proferida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas confirma la negación.
3. **Hasta la fecha no se ha resuelto el recurso de apelación surgiendo el acto ficto o presunto surgido al no resolverse el recurso de apelación** concedido en la Resolución que resolvió el recurso de reposición confirmado la negativa
4. El argumento para la negativa es bastante peregrino, simplemente aducen: *“Por lo tanto, es posible establecer que la situación que describe la declarante y de acuerdo a diversas fuentes de contexto consultadas, que esta puede corresponder a bandas criminales que delinquen en la zona; las cuales no tienen la connotación de “grupo armado al margen de la ley”.*

Agregan más adelante: *“ Que, sin embargo, para estos casos, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, quiere dejar claro que las conclusiones jurídicas y motivas del presente acto no excluyen la posibilidad que tiene la declarante de exigir medidas de verdad, justicia y reparación.*

Resuelven, No INCLUIR a la suscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV) y NO RECONOCER el hecho victimizante de homicidio.

5. Por lo anterior interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la referida resolución, del cual hasta la fecha no he obtenido respuesta, recurso en el cual argumentaba:

“No comparto cual fue el criterio que tuvo los funcionamientos de analizar mi caso, toda vez que han violado los criterios técnicos como Tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de la muerte de mi esposo,



ya que de acuerdo a las pruebas notorias que aportó el que asesinó a mi esposo es considerado guerrillero, luego fue paramilitar y delinquiró como cabecilla del grupo de Autodefensas urbanas facción paramilitar surgidas en el municipio de Jamundí Valle"

Alias "El Indio", después de la Ley Víctimas – Ley 1448 de 2011- fue capturado en el Municipio de Restrepo, municipio que ha sido catalogado como de orden público y que en las estadísticas del Observatorio de Paz y de Derechos Humanos figura que han tenido asentamientos la Guerrilla de las FARC y Autodefensas del Bloque Calima.

No comparto que la Unidad de Víctimas establezca que alias "El Indio", al estar integrando en la actualidad una banda emergente o BACRIM, desconozca la procedencia de él como miembro Paramilitar y que opere en varias zonas del valle, realizando muertes selectivas, tal como ocurrió con la muerte de mi esposo"

6. Ahora el argumento es confuso, pues la Honorable Corte Constitucional ha precisado, en el Auto 119 de 2013, proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia 7-025 de 2004 que decretó un estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada.

El documento de 70 páginas establece que es inconstitucional la negación por parte de la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad de Víctimas de personas desplazadas por situaciones de violencia generalizada, como las víctimas de las Bacrim, y, en términos más amplios, en aquellas circunstancias en las que el desplazamiento no guarda una relación cercana ni suficiente con el conflicto.

Ahora bien, la Sala Especial estableció que los criterios que tiene la Dirección de Registro para evaluar si los hechos en que se produjo un desplazamiento tiene o no estrecha relación con el conflicto, no van de la mano con los que ha establecido la Corte Constitucional. Esto, por ejemplo, porque se da mucha importancia la rótulo del actor que produjo el daño.

"Esta Sala Especial advierte que el 'rótulo' o denominación del actor como parte del conflicto armado o de la delincuencia común, no puede ser un argumento a priori y formal para definir de antemano si un determinado daño se enmarca o no dentro del conflicto armado (...) La calificación del actor como grupo organizado al margen de la ley tampoco debe ser un requisito para considerar que el daño guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto armado", señaló la Sala.

Por eso, y al considerar que todavía no se cuenta con criterios para definir en qué casos el accionar de las Bacrim guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto armado, la Sala ordenó a la Unidad de Víctimas adoptar criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

7. Pasa por alto la entidad, que el asesinato del hijo de la demandante FANIER ARGEMIRO SAENZ TORO, acaecida el día 08 de Julio de 2008, siete (7) meses antes del asesinato de su esposo **ARGEMIRO SAENZ ALZATE**, en hechos sucedidos 25 de Febrero de 2009, están relacionadas, en el caso de su hijo, él como colaborador de la Policía, denunció la presencia de "Alias El Indio", en la municipalidad, quien posteriormente fue capturado.
8. Además, es de notorio conocimiento que el municipio de Restrepo Valle del Cauca, inicialmente hicieron presencia los PARAMILITARES DEL BLOQUE CALIMA, luego de su desmovilización hicieron presencia las BACRIM.
9. Igualmente el criterio tenido por los funcionarios al analizar el presente caso, es totalmente contrario a la ley, pues el compañero de la demandante, padre de sus hijos, fue asesinado a machete, además de impactarlo con arma de fuego, constituyendo un delito de lesa humanidad, hecho punible que ha quedado en la impunidad.
10. Es claro que las medidas de reparación implican la existencia de un daño derivado de la comisión de un hecho antijurídico, sea un delito o una violación de derechos humanos.
11. En este caso la obligación estatal responde a criterios de justicia correctiva y encuentra sustento constitucional en el deber de responder por los daños antijurídicos que le sean imputables (art. 90 CP), o en el de disponer el restablecimiento de los derechos y la reparación integral a los afectados por



conductas punibles (art. 250 CP), así como en las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a los Estados a garantizar la reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

12. Los beneficiarios de estas medidas son las personas reconocidas como víctimas y su propósito es el restablecimiento de los bienes y derechos afectados como consecuencia del daño.
13. La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.
14. Igualmente están pasando por alto, lo dispuesto en el último inciso del Artículo 3° de la Ley 1448 de 2012, "(...) *La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. (...)*; pues para nadie es un secreto que generalmente los crímenes en nuestro país quedan impunes, y el de mi padre no fue la excepción.
15. Ahora, la decisión es contraria a lo dispuesto en el Artículo 5° de la ley 1448 de 2011 que establece: "(...) **ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE.** *El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. (...)*"
16. También contraviene lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto 4800 de 2011, "*Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones*". Artículo 19. *Principios que orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas. Las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos: 1. El principio de favorabilidad. 2. El principio de buena fe. 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho. 4. El principio de participación conjunta. 5. El derecho a la confianza legítima 6. El derecho a un trato digno. 7. Hábeas Data (...)*"
17. Ahora la valoración van en contravía de los criterios ampliamente definidos por la Corte Constitucional al momento de valorar el reconocimiento de las víctimas como son:
 - La presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos
 - La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
 - La situación de orden público en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de inteligencia del Estado relacionados con los hechos.
 - La inclusión de las víctimas en los informes que reposen ante organismos internacionales.
 - El riesgo a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos profesionales, laborales, sociales, religiosos, políticos, gremiales, o de cualquier otro tipo
 - Las modalidades y circunstancias del hecho.
 - La amistad o enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
 - Las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el género y ocupación.
 - La inclusión de las víctimas en algunas de las siguientes bases de datos: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social; Fiscalía General de la Nación; Procuraduría General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Dirección de Derechos Humanos del



Ministerio del Interior y de Justicia; Ministerio de la Protección Social; Policía Nacional; Departamento Administrativo de Seguridad; Fuerza Pública; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Organización Internacional para las Migraciones; Programa de la Vicepresidencia de la República de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonas.

Fundamentado en las anteriores razones de hecho y derecho, solicito se hagan las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos que niegan la inclusión del Señor **ARGEMIRO SAENZ ALZATE**, como víctima del conflicto armado, en hechos acaecidos el día 25 de Febrero de 2009, en el Municipio de Restrepo Valle del Cauca, contenidos en la **Resolución No.2013 -10579 del 05 de Diciembre de 2012**, decisión confirmada mediante la **Resolución No. 2295 del 23 de Febrero de 2015**, proferida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el **acto ficto o presunto surgido al no resolverse el recurso de apelación** concedido en la Resolución que resolvió el recurso de reposición confirmado la negativa; lo pedido es la revocatoria de los referidos actos administrativos, reconociéndole la reparación administrativa contemplada en la Ley de Víctimas.
2. Que como consecuencia se reconozca la reparación administrativa a la Señora demandante.
3. Que se ordene el pago de la indemnización administrativa contemplada en la Ley de Víctimas – 1448 de 2011.
4. Que se RECONOZCA por concepto de perjuicios morales la sumas de CUARENTA salarios mínimos mensuales legales vigentes (40 SMMLV), que hoy corresponden a \$27.000.000 (VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE).

ARGUMENTOS JURIDICOS

NORMAS VIOLADAS

-CONSTITUCIONALES:

Artículos 2, 13 y 29, entre otros.

LEGALES:

Ley 1448 de 2011, art 5

Decreto 4800 de 2011

CONCEPTO DE VIOLACION

Los actos administrativos que desconocen la calidad de víctima de los hoy convocantes desconocen lo preceptuado en los artículos 2, 13 y 29 de la Constitución, igualmente lo dispuesto en las normas legales que a continuación me referiré:

El Artículo 5° de la ley 1448 de 2011 que establece: “(...) **ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE.** El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. (...)”

El Artículo 19 del Decreto 4800 de 2011, “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. Artículo 19. *Principios que orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas. Las normas*



que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos: 1. El principio de favorabilidad. 2. El principio de buena fe. 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho. 4. El principio de participación conjunta. 5. El derecho a la confianza legítima. 6. El derecho a un trato digno. 7. Hábeas Data (...).

Ahora la **Sentencia C-253A/12, que estudio la Constitucionalidad de la Ley de Víctimas, preciso:** “(...) La Ley dispone que son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado, definición ésta con un alcance operativo que se orienta a fijar el universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la ley, en la que también se parte de un reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello, consagra los **principios de buena fe, encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición ya que se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario** (...)”

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

Señala el literal c) del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Ley 742 de 2002. Sentencia C-578 de 2002 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa)

“c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949[7], a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa”.

- i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
- ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes;
- iii) La toma de rehenes;
- iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
- d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar”.

Se observa que la disposición no circunscribe el deber de los Estados ni el correlativo derecho de las víctimas a vulneraciones acaecidas dentro del marco de determinadas acciones, dejando a un lado otras, toda vez que el objetivo de la disposición internacional tiene que ver con la protección de la población civil afectada por el conflicto armado, por actos de violencia contra la vida, la dignidad humana y la libertad personal, cualquiera fuere la forma o modalidad de la infracción.

LOS ESTADOS NO PUEDEN HACER RESPONSABLES A LAS VÍCTIMAS DE SUS OMISIONES

El primero entre los treinta y ocho (38) Principios que conforman la directriz de apoyo a los Estados, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72, expedida por la Comisión de Derechos Humanos establece:

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de perjuicios sufridos, de garantizar



el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

Señala el Principio Diecinueve de la directriz a que se hace mención i) que los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y *“adoptarán medidas apropiadas respecto de los autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente”* y ii) *que, sin perjuicio de la responsabilidad estatal en la materia, se adoptarán medidas complementarias para garantizar la participación de las víctimas y de toda persona u organización no gubernamental “interesada (...) como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados, cuyo derecho penal contemple esos procedimientos”.*

Los Principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que ésta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto *“no existan recursos eficaces contra esa infracción”* y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de *“las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”* –Principios 22 y 23–.

En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir *“medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”,* sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración –artículo 2° C.P. Principio 34–.

En términos generales, cuando alguien ha realizado un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona le genera la obligación de realizar en provecho de ésta una prestación resarcitoria, comoquiera que ésta no está obligada a soportar la conducta antijurídica de la que fue objeto. En este sentido el artículo 2341 del Código Civil establece que *“el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.*

Cuando las conductas trascienden el campo de las relaciones personales y tienen una repercusión social, el derecho sanciona ese comportamiento con la finalidad de proteger no sólo el interés o bien individual sino también el social, lo que constituye el objeto jurídico del delito y genera la acción penal pública que por regla general corresponde emprender de oficio al Estado.

De este modo, el daño producto del delito tiene dos connotaciones “a) el daño público o social que se produce al lesionar el bien o interés jurídico protegido por el Estado y que explica su intervención poniendo en marcha el aparato punitivo, imponiendo las sanciones a quien ha infringido el orden jurídico, pues el delito es siempre un hecho que perjudica a la comunidad y b) el daño particular que se produce con la lesión del bien jurídico, conocido como daño civil, da lugar a la acción civil para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con el ilícito, estableciéndose por el ordenamiento jurídico la obligación para el sujeto activo de reparar los daños tanto morales como materiales.

El daño individual producto del acaecimiento de una conducta sancionable por el ordenamiento penal, genera la obligación de reparar a la víctima el perjuicio ocasionado al bien jurídico que se pretendía tutelar, es así como expresamente el artículo 94 del Código Penal lo dispone al consagrar que *“la conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquélla.*

Postulado que resulta acorde con la disposición Constitucional que le impone a la Fiscalía General de la Nación, como ente encargado de adelantar el ejercicio de la acción penal, *“solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”* (numeral 6° del artículo 250).

Bajo esta misma premisa, está consagrada la responsabilidad patrimonial del Estado frente al acaecimiento de un daño antijurídico, al respecto el artículo 90 de la Constitución Nacional establece que *“el Estado responderá*



patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”.

En el campo internacional en materia de la protección de los derechos humanos fundamentales y su vínculo con la reparación frente a la vulneración de éstos, la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de diciembre de 2007 consagró una serie de Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y entre éstos dispuso:

“...VII. Derecho de las víctimas a disponer de recursos

11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

a) Acceso igual y efectivo a la justicia;

b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;

c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación....”.

Del mismo modo el numeral 1° del artículo 63 de la Convención Americana sobre derechos humanos establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,... dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada....”.

Así, las víctimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comoquiera que no estaban obligadas a soportarlo y que desencadenó una vulneración masiva de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de circulación, de residencia, elección de profesión u oficio, entre otros, que implicaron su desarraigo y el sometimiento a unas circunstancias ajenas a su existencia y a la ausencia de condiciones mínimas de existencia, de allí la procedencia de la reparación del daño sufrido.

De este modo las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del daño causado.

PRINCIPIO 1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ESTADOS DE ADOPTAR MEDIDAS EFICACES PARA LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD

La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

(...)

IV. DERECHO A OBTENER REPARACIÓN/GARANTÍAS DE QUE NO SE REPITAN LAS VIOLACIONES

A. El derecho a la reparación

PRINCIPIO 31. DERECHOS Y DEBERES DIMANANTES DE LA OBLIGACIÓN DE REPARAR



Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.

(...)” Asimismo, la Resolución 60/147 precedentemente citada declara en el Principio IX De la reparación de los daños sufridos que:

“...Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima...”.

De los principios internacionales de protección de derechos humanos, se desprende que la exigencia del derecho a la reparación de las víctimas de las violaciones flagrantes de derechos humanos, no está subordinada al proceso de investigación que debe el Estado adelantar contra el victimario, comoquiera que éstas deben ser satisfechas en primer lugar por el Estado, porque éste es el principal garante de los derechos fundamentales, porque la condición de víctima y los derechos que de ésta se derivan no dependen de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario y porque el Estado tiene la facultad de repetir contra el autor del delito, y ello es así porque precisamente es el Estado el que tiene el deber y la facultad de perseguir a quien violó flagrantemente los derechos fundamentales, él únicamente posee la potestad de castigar a quien infringió la norma, es decir, de hacer respetar sus leyes, las cuales deben tener como finalidad la protección de los derechos fundamentales no sólo para que éstos no sean transgredidos, sino también para que cuando sean vulnerados se repare como consecuencia del daño infringido.

De este modo, si no es perseguido y no es castigado el victimario, esta carga no debe ser soportada por la víctima, pues no la puede cumplir, es solo el Estado el que la debe asumir, y si en eso falla, ha de asumir la obligación de reparación y conservar la facultad de repetir contra el victimario.

El daño acaecido por la violación flagrante de los derechos humanos, genera a favor de la víctima el derecho fundamental a la reparación de los perjuicios directamente ocasionados con la trasgresión, a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional. La exigencia y la satisfacción de este derecho fundamental se dan independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del victimario, debido a que aquel deriva precisamente de la condición de víctima, cuyos derechos corresponde al Estado salvaguardar, sin perjuicio de que pueda repetir contra el autor.

PRUEBAS

Solicito tener como pruebas las siguientes:

Documentales

Que se acompañan con la demanda

Actos Administrativos demandados.

Que se requieren oficiar

Que se oficie a la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL**, para que remita el expediente administrativo.

Testimonial

Solicito al Despacho recepcionar los testimonios de las personas a mencionare a continuación, prueba que tiene por objeto confirmar lo relatado en los hechos de la demanda.



Los declarantes son residentes en la municipalidad de Restrepo y pueden ser citados por la suscrita profesional.

CUANTÍA

La cuantía la estimo en una cifra aproximada de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales, que corresponden en la actualidad a la suma de cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos (\$ 51.548.000.00)

COMUNICACIONES

La demandante Vereda “La Albania”, Municipio de Restrepo, teléfono 312 2223745 o en la Personería Municipal de Restrepo Valle del Cauca.

La entidad accionada en Carrera 100 No. 24D Santiago de Cali.

Las mías las recibiré en la Calle 33 A N No. 2 – 54, Apto 504 B, Conjunto Parques de la Flora, Santiago de Cali.

Atentamente,

LILIANA ANDREA VELASQUEZ

C.C. No. 29.742.824

T.P. No. 244.138 del C.S. de la J.;

LILIANA ANDREA VELÁSQUEZ
ABOGADA

